

LA “GUERRA” POR EL AGUA EN COCHABAMBA. CRÓNICA DE UNA DOLOROSA VICTORIA¹.

Por Manuel De La Fuente

1. El Inicio.

Todo empezó con la suscripción de un contrato aparentemente anodino, pero que con el tiempo, fue considerado por la población de Cochabamba como algo perjudicial a los intereses de la región. Y es que *el consorcio* “Aguas del Tunari”, mayoritariamente extranjero, que había recibido la concesión del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) y la realización del Proyecto Múltiple Misicuni, tenía abiertas las puertas para hacer unas copiosas ganancias. Sin prácticamente traer ningún capital del extranjero, puesto que las inversiones que planeaba realizar vendrían de los aportes de los actuales usuarios de la red de agua de la ciudad y de los potenciales beneficiarios de la misma, que extrañamente pagarían por un servicio que todavía no tienen².

Pero lo que complicaba aún más la situación, entre varias otras observaciones, era el hecho de que la empresa no garantizaba la realización del Proyecto Múltiple Misicuni, en sus tres componentes de dotación de agua potable, agua de riego y generación de electricidad. Ya no era, a decir de muchos, la concreción del gran Misicuni, sino simplemente de un reducido “Misicunito”.

En síntesis, un negocio redondo para los empresarios extranjeros (o piratas, siguiendo la tradición de sus antepasados, los corsarios ingleses Drake o Morgan), que no arriesgaban mucho y que contractualmente tomaron todas las ventajas de una forma absolutamente abusiva y oportunista. Pero también para algunos nacionales como Samuel Doria Medina, alto dirigente del MIR, que puso unos cuantos pesos para comprar cerca del 5 % del paquete accionario de Aguas del

¹ Quisiera agradecer a José De La Fuente, Tomas Kruse y Carlos Crespo por sus comentarios y sugerencias, gracias a los cuales este texto ha mejorado notoriamente. Sin embargo, los errores u omisiones que quedan son de mi entera responsabilidad.

² Según Carmen Ledo en su artículo “Iniquidad y exclusión social en el acceso al servicio de agua potable en Cochabamba” de próxima publicación, destaca el hecho de que “alrededor del 90% de la población residente en los barrios del Casco Viejo y del Noreste” (donde residen los sectores de mayor poder económico) tienen acceso al servicio de agua Mientras que “más de la mitad de los hogares ubicados en la periferia Sur Occidental” no cuentan con dicho servicio. Estos datos, más las promesas reiteradas en múltiples oportunidades y nunca cumplidas de diversas autoridades, muestran lo explosivo que es el tema del agua en Cochabamba.

Tunari. Con seguridad el “rey” del cemento estaba allí por los beneficios económicos, pero quizás también para garantizar políticamente que el contrato no sea contestado.

Este contrato fue suscrito el 4 de septiembre de 1999. El presidente Banzer en persona vino a Cochabamba a celebrarlo. Celebración que contó con el apoyo por una parte, del alcalde municipal de Cochabamba, que en ese entonces gozaba de mucho simpatía y por otra parte del Presidente del Comité Cívico, institución con una amplia trayectoria y prestigio en la región.

Parafraseando a Jaime Paz, ex presidente de la República, que más se podía pedir. Todas las autoridades nacionales, departamentales, municipales y cívicas estaban de acuerdo. Sin embargo ya en ese momento se escucharon unos cuantos petardos³ de desaprobación, en la Plaza 14 de Septiembre. Los que se oponían todavía eran unos pocos, desconocidos personajes miembros del Comité de Defensa del Agua, germen de la después poderosa “Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida”.

Paralelamente a esta situación, el Gobierno archivo la polémica “Ley de Aguas” y el presidente Banzer promulgó a fines de octubre la Ley 2029, llamada del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Ley que surgió de improviso, como un as sacado de la manga, pero que tenía la finalidad entre otras cosas, de legalizar el Contrato suscrito con Aguas del Tunari. Lo cual por un lado acrecentó las sospechas sobre dicho contrato y por otro lado, motivo a la población de la ciudad, unida bajo el paraguas de la Coordinadora a pedir modificaciones de dicha Ley.

Por otra parte, la Ley⁴ posibilitaba la concesión de monopolios en la dotación de agua en una determinada región, obligando a conectarse a la red del concesionario las actuales cooperativas, pozos, y otras fuentes de provisión de agua. De esta manera se ponía en cuestión la actual utilización del agua por parte de organizaciones de vecinos en la ciudad, pero también por los pobladores del campo. Era inevitable entonces el rechazo de la Ley, especialmente de las organizaciones de regantes, que habían construido con sus recursos gran parte de los sistemas de riego actualmente existentes y en los que participaban los pequeños productores campesinos.

³ El presidente Banzer al escuchar estos petardos indicó que ya estaba acostumbrado a ese tipo de “música”. Lo que no se imaginaba, al decir de unos amigos era la “sinfonía” que se le venía encima.

⁴ Por un análisis mas detallado de la Ley y de sus posteriores modificaciones ver Pablo Solón y Rene Orellana “Cambios en la Ley de agua potable... ¿quiénes ganan?. (La Razón, Ventana, 16 de abril). Además, en anexo se ha reproducido el cuadro resumen que ellos presentan.

Además, la población de los municipios vecinos se sentían amenazados por el “famoso contrato”, con Aguas del Tunari, ya que una de sus cláusulas permitía a la empresa expandir sus actividades a Sacaba y Quillacollo, lo que creaba una inseguridad en la utilización de las fuentes de agua de la región. En consecuencia, los habitantes de dichas zonas se encontraban prestos a la lucha para preservar los usos y costumbres consuetudinarios de la utilización del agua. Estaban entonces dadas las condiciones para una alianza entre los habitantes de la ciudad capital y de las ciudades intermedias y los campesinos, todos luchando por el líquido elemento⁵.

2. Incremento de la tarifa de agua potable y las jornadas de enero.

En enero las tarifas del agua se incrementaron, subiendo en algunos casos en más de un cien por cien, lo que desencadenó una serie de manifestaciones. El 11 de enero, tanto el Comité Cívico, como la Coordinadora y otras instituciones convocaron a una movilización, que duro tres días, ocasionando que el gobierno se comprometiera a elaborar una nueva estructura tarifaria, acepte estudiar la revisión del contrato con Aguas del Tunari y consienta modificar la Ley 2029.

Estas primeras jornadas de confrontación mostraron un cierto agotamiento del Comité Cívico (ya desgastado por el pase de su Presidente a filas del NFR) que perdió poco a poco el liderazgo de la lucha. Pasando la dirección a manos de la Coordinadora, que comenzaba a demostrar una importante capacidad de convocatoria y organización del pueblo cochabambino.

¿Pero de donde viene la fuerza de la Coordinadora? Una de las razones, es la relación de dialogo que establece con las masas movilizadas. Es así, que en esta primera movilización la Coordinadora convocó a un cabildo abierto, donde preguntó a los manifestantes el camino a seguir. Ya en el transcurso de la lucha, la consulta fue permanente, tomando nuevamente la forma de Cabildos o de otras modalidades de consulta, como veremos más adelante.

Otra razón, es el hecho que la Coordinadora se asienta en las organizaciones “naturales” de la comunidad: federaciones, sindicatos urbanos (particularmente los fabriles), juntas de vecinos, barrios de migrantes, grupos de universitarios,

⁵ El gobierno y algunos cientistas sociales han criticado a la Coordinadora por haber involucrado a “campesinos ignorantes” en el conflicto del agua, que solamente tenía que “ver con el Cercado”, tratando de dividir al movimiento, creando susceptibilidades entre los ciudadanos. Por lo dicho líneas arriba, el Contrato con Aguas del Tunari y la Ley 2029 estaban interrelacionadas, por lo tanto los campesinos cuando marchaban por las calles de Cochabamba, lo hacían en conocimiento de causa y los pobladores de Cochabamba lo entendían así, dándoles toda clase de muestras de solidaridad.

profesionales, organizaciones territoriales de base, la federación de colonizadores del trópico sindicatos campesinos, y otras organizaciones de base, principalmente las organizaciones de regantes. En base de ello logra montar un sólido frente social, aprovechando el capital social comunitario, que está muy presente en la sociedad boliviana.

Finalmente, la fortaleza de la Coordinadora dependió del comportamiento de los otros actores involucrados en el conflicto. Y esta es una paradoja, ya que a veces los resultados de los conflictos no sólo dependen de lo bueno que uno puede ser, sino que pueden depender de lo torpe que sean los contrincantes. En este caso, primeramente los personeros del Comité Cívico demostraron una gran incapacidad. Luego, el alcalde "perdió el habla". Enseguida, la empresa Aguas del Tunari y en general los empresarios privados de Cochabamba, aglutinados en la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba, no atinaron a defenderse. Por último, y no por ello menos importante, el Gobierno metió la pata una y otra vez a lo largo del conflicto.

3. Una toma no tan pacífica de la ciudad.

Como las negociaciones no avanzaban, la Coordinadora convocó a una "toma pacífica" de la ciudad el viernes 4 de febrero. Esta movilización no fue autorizada por el Gobierno, que se propuso evitar cualquier tipo de manifestación, en ese sentido el Ministro Guiteras hizo toda una serie de declaraciones, indicando que no se toleraría ninguna marcha ni toma de la ciudad, para lo cual se reforzó a las fuerzas del orden regionales, trayendo unos 700 efectivos policiales y militares de La Paz y de otras regiones del país. Estos efectivos se desplegaron un día antes, el jueves 3, en puntos estratégicos de la ciudad y en algunas zonas aledañas, militarizando de esta forma la ciudad. Además, los "dalmatas" llamados así los policías del "Grupo de Seguridad Especial" se pasearon en sus motocicletas por las calles, mostrándose de manera amenazadora.

Frente a esta realidad, el dirigente fabril y principal representante de la entidad defensora del agua, Oscar Olivera, manifestó que "ante la militarización como en los tiempos de la dictadura banzerista, los cochabambinos saldrán a las calles para recuperar la palabra, el derecho a reclamar y también para recuperar la democracia" (Los Tiempos, 4 de febrero).

Y efectivamente la gente salió a las calles, a pesar de las declaraciones incendiarias del Ministro de Gobierno Guiteras y de todo el escenario de amedrentamiento que montó el gobierno. En realidad, esta política de intimidación lo único que logró fue enardecer a la población que estuvo enfrentándose a las

fuerzas del orden durante toda la jornada. Uno de los periódicos de la ciudad describió la situación de esta manera:

“Por lo menos tres avionetas en vuelo rasante votando panfletos pro gubernamentales, el sonido que las botas militares hacen cuando marchan al compás, trincheras policiales en pleno centro, nubes de gas, gente corriendo sin dirección con síntomas de asfixia, arriesgados manifestantes con palos y piedras en la mano, llanto, violencia y desesperación. Eso era Cochabamba ayer, un inmenso campo de batalla en el que la represión policial no tuvo límites.” (Los Tiempos, 6 de febrero)

Al día siguiente, el 5 de febrero, los enfrentamientos se continuaron y los bloqueos de calles se produjeron en toda la ciudad, pero ese día también el gobierno tuvo que ceder, después de arduas negociaciones que fueron facilitadas por la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo se firmó un nuevo acuerdo, que retomaba los tres puntos ya acordados en enero, es decir que se continuaría con la revisión: de la estructura tarifaria, del contrato suscrito con Aguas del Tunari, y de la Ley 2029 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

Pero además, el acuerdo entre el Gobierno, la Coordinadora y un muy disminuido Comité Cívico, indicaba que se continuará cobrando la tarifa por el consumo de agua conforme al régimen tarifario vigente en octubre de 1999, anulándose de esta manera los incrementos en las tarifas y esto hasta que se concluya el proceso de negociación. Por otra parte, el gobierno se comprometía a liberar inmediatamente a todos los detenidos y a pagar la curación de la centena de personas que resultaron heridas durante esos conflictivos días del febrero.

Cabe notar que esa magnitud de heridos, demuestra la dureza de los enfrentamientos. También, vale la pena destacar la actuación del arzobispo de Cochabamba, y de la Defensoría del Pueblo en el logro de la pacificación de Cochabamba. Lamentablemente la tranquilidad social no duraría mucho tiempo.

4. La Consulta Pública Popular.

Para llevar adelante la revisión de las tarifas y el contrato con Aguas del Tunari se conformaron comisiones de trabajo, en las que participó la Coordinadora, centrando su atención no tanto en las tarifas, sino más bien apuntando hacia el contrato. Para lo cual se apoyó, en los Colegios de Profesionales, particularmente en el Colegio de Economistas. Fue el presidente de esa Institución, Samuel Soria quién se encargó de argumentar lo lesivo que era el contrato con la empresa Aguas de Tunari y la poca solvencia financiera que tenía la mencionada empresa.

Por su parte, el gobierno trató de llevar la discusión al terreno de las tarifas, ofreciendo rebajas que no fueron aceptadas. En cuanto al contrato y con respecto a la solvencia financiera de Aguas del Tunari, las respuestas del Gobierno y de la misma empresa fueron muy nebulosas y dilatorias. A medida que pasaba el tiempo no le quedó a la Coordinadora otra alternativa que tomar una decisión muy complicada, la de dejar la mesa de las negociaciones. ¿Qué hacer entonces?

Radicalizando su posición tomó la decisión de reclamar al gobierno la anulación del contrato con Aguas del Tunari y para legitimar dicha decisión nuevamente la Coordinadora utilizó el dialogo con la población y organizó una Consulta Popular. Era un desafío importante: el de organizar prácticamente un plebiscito de la ciudadanía. Y venció la prueba, ya que entre 30 y 50000 personas expresaron su acuerdo con la Coordinadora, depositando su voto en alrededor de 150 mesas que se instalaron en distintos sectores de la ciudad. Votaron por el SI, lo que significaba que Aguas del Tunari tenía que irse de la Llañta. Que esa cantidad de vecinos hayan concurrido en un día domingo sin que hubiera mucha publicidad ya que la Coordinadora no tenía recursos económicos, y que lo haya hecho frente a la oposición o la indiferencia de casi el conjunto de las Instituciones Cochabambinas es realmente una proeza, Y así lo tomo la Coordinadora, que fuerte de ese mandato organizó la “Batalla Final”, convocando a un nuevo paro indefinido que debía iniciarse el martes 4 de abril.

Pero antes de relatar dicha “batalla”, es bueno señalar que en la otra mesa de negociaciones, en la que se discutía la Ley 2029, dos semanas antes, se llegaron a acuerdos significativos. Gracias a estos acuerdos, en los que la Brigada Parlamentaria de Cochabamba jugo un papel importante, se logró que el Parlamento Nacional se proponga modificar la Ley 2029. Pero como de costumbre, si es que no hay una fuerte presión, el Congreso tarda demasiado. Si se hubieran hecho las modificaciones rápidamente, sin duda se hubiera debilitado el poder de convocatoria de la Coordinadora. Pero no fue así y el 4 de abril nuevamente la gente del campo y de la ciudad estaban unidas en la lucha.

5. Los lamentables enfrentamientos de abril.

La respuesta del Gobierno al paro indefinido fue el de “dejar hacer”, esperando que los bloqueos y otras incomodidades cansen a la población, que entonces se pondría en contra de la Coordinadora. Durante los primeros días del paro, que fue total, ya que calles, avenidas y carreteras estaban completamente bloqueadas, el Gobierno, el Comité Cívico y una serie de personalidades llamaron a la reflexión a la Coordinadora, señalando que si se iba Aguas del Tunari sería un gran perjuicio para la región y el país, ya que se estaría dando una mala señal a los inversionistas extranjeros. En esta batalla comunicacional, que duró horas de horas (ya que radios

y canales de televisión locales prácticamente sólo se referían al conflicto) la Coordinadora perdió puntos y fue obligada a volver a la mesa de negociaciones el tercer día del paro. Además, ciertos sectores como los transportistas y comerciantes empezaban a plantearse con retirarse de la huelga.

Ese jueves, para suerte de la Coordinadora el gobierno cometió una gran torpeza, al tomar presos a sus representantes, justo en plena negociación en la Prefectura. Este encarcelamiento, en el marco de un supuesto Estado de Sitio, se hizo frente a las cámaras de televisión, que inmediatamente informaron al conjunto de la población, en emisiones especiales de media noche.

Esta “trampa” que se hizo a la Coordinadora suscitó una reacción inmediata del arzobispo de Cochabamba, quién se asumió “preso voluntario”. También el alcalde protestó vehementemente, retomando la palabra, después de un significativo silencio. Sin embargo la reacción más fuerte se vería al día siguiente, cuando la población tomaría nuevamente las calles.

Lo irónico y dramático del caso fue que a las pocas horas el gobierno desmintió la noticia del Estado de Sitio y liberó a los prisioneros, pidiéndoles disculpas. Otra situación que enardeció a la población fue el hecho que el Parlamento decidió suspender inesperadamente sus deliberaciones, en momentos en que los diputados ya habían modificado buena parte de la Ley 2029. Sólo faltaba modificar unos cuantos artículos, para que la gente del campo se sintiera satisfecha y levantará los bloqueos que tenazmente mantenían. ¡Algo incomprensible!

En consecuencia, la Coordinadora a la que ya le estaba faltando aire salió de esta situación realmente oxigenada y el viernes la población salió en masa para protestar contra semejante atropello. Unas 50 mil personas se congregaron en la Plaza y no faltaron escaramuzas con la policía y una serie de desmanes. Tal era la furia de la población que el Prefecto, mientras se estaba por reiniciar las negociaciones, tuvo temor de un enfrentamiento sangriento y anunció por intermedio del arzobispo de Cochabamba, que el Consorcio Aguas del Tunari se iba de la ciudad. La noticia alegró a la muchedumbre que festejo durante varias horas. Por su parte, los bloqueos empezaron a ser levantados, todo indicaba que se volvía a la normalidad.

Pero no, el Gobierno a las pocas horas desautorizó al Prefecto que tuvo que renunciar y echando una vez más “leña al fuego” decretó el Estado de Sitio. Nuevamente varios dirigentes de la Coordinadora fueron hechos prisioneros, como en los peores momentos de la dictadura banzerista de los años 70, se encapuchó a los detenidos y se los hizo desaparecer durante varias horas. Los familiares tuvieron que peregrinar de un lugar al otro para saber finalmente que sus seres queridos habían sido enviados a San Joaquín en el Beni.

El Estado de Sitio en vez de apaciguar los ánimos, agravó la situación no solamente en Cochabamba sino también al nivel de los bloqueos de caminos que se producían en el Altiplano. Por otra parte, surgió un nuevo foco de conflicto en el seno de la policía.

Frente a este panorama que se iba enrareciendo cada vez más, el gobierno primero cedió frente a los policías, aumentando su salario en un 50%. Que ironía ya que unas semanas antes la fuerza del orden se hubiera contentado con un aumento del 20%.

Lamentablemente en el caso del Altiplano y siguiendo una tradición nefasta, el ejercito trató de desbloquear los caminos, a sangre y fuego, matando a varios campesinos. Parecería que los espíritus señoriales todavía están muy presentes en la mentalidad de muchos bolivianos, incluidos los oficiales del ejercito. La represión en el Altiplano tampoco fue muy eficaz y al final el gobierno tuvo que negociar. Lo deplorable de todo fue la perdida de vidas humanas, no solamente por parte de los campesinos sino también por parte de los militares, que tuvieron que lamentar la muerte de un capitán, linchado en Achacachi⁶.

En el caso de Cochabamba, el sábado la ciudad amaneció militarizada, pero al cabo de unas horas la gente empezó a bloquear nuevamente las calles y a enfrentarse a la policía y al ejercito. La violencia llegó a extremos impresionantes, y lo más dramático fue el intento de asalto al cuartel de la Séptima División del Ejercito. Los manifestantes con piedras y palos se enfrentaron a los militares, con una osadía que solo la rabia (frente al engaño y las reiteradas mentiras del gobierno) puede explicar. La policía militar respondió con gases y balines, pero además algunos otros militares “camuflados” de civil tuvieron la irresponsabilidad de disparar sus armas de fuego. Resultado 1 muerto y alrededor de 30 heridos de bala.

Después de varias horas de combates, se llegó a una tregua, tanto los policías como los militares se retiraron a sus cuarteles. Tal vez se dieron cuenta que de seguir combatiendo con los “guerreros del agua” corrían el serio riesgo de ser rebasados. La ciudad quedó entonces en manos de los manifestantes, particularmente, como bien lo señala Ramírez, en su artículo “Cochabamba, siete días bajo fuego”, de los “chicos de la calle”, adolescentes y niños que se incorporaron a las manifestaciones, construyendo ellos mismos sus barricadas y sintiendo “como el conjunto de los insurrectos, el poder entre sus manos” (La razón, Ventana, 16 de abril).

El domingo, en medio de una tensa calma, se produjo el entierro de Hugo Daza, el joven de 17 años que resultó muerto en los enfrentamientos con el ejercito, que fue

⁶ Por una reflexión histórica del incidente, ver Javier Mendoza, “A noventa y nueve años de La criminalidad aymara”, La Razón, Ventana, 23 de abril.

realmente conmovedor, contando con una presencia masiva de la población. Mientras se realizaba el sepelio, el superintendente de Aguas anunció que la empresa Aguas del Tunari se iba de Cochabamba. La gente recibió la noticia con mucha cautela, y los personeros de la Coordinadora, que estaban en la “clandestinidad” demandaron un documento firmado por el gobierno, que confirmará dicha noticia y pidieron que una Comisión de alto nivel venga a Cochabamba.

El lunes, el gobierno siguió metiendo la pata, indicando que lo que sucedía en Cochabamba era obra del narcotráfico y que la Comisión que debía estar encabezada por el Vicepresidente de la República no iría a Cochabamba y que no se negociaría con los subversivos de la Coordinadora. Declaraciones sin sentido, esta vez del Ministro de Informaciones, que dejó su cátedra en Harvard para ser vocero del Gobierno sin tener paradójicamente, toda la información que su puesto requiere. En realidad como bien dice Sergio Molina en su artículo “El arte de la Guerra” “Ronald MacLean fue una sombra encanecida y desvelada en medio de un mar de acontecimientos en los que navegaba a la deriva” (La Prensa, Domingo, 16 de abril)

Por supuesto que la marcha convocada por la Coordinadora para ese lunes fue masiva⁷. Frente a esta multitudinaria manifestación, para evitar mayores conflictos y a pesar de las declaraciones del Ministro de Informaciones, el Gobierno tuvo que negociar con la Coordinadora. Finalmente el Gobierno comprendió que la movilización de Cochabamba era genuina y que los dirigentes de la Coordinadora no eran ni narcotraficantes ni subversivos.

Las negociaciones afortunadamente tuvieron un desenlace feliz. Todo lo planteado por la Coordinadora fue aceptado. Aguas del Tunari se iba, se concluiría las modificaciones de la Ley 2029, los presos y confinados serían liberados y se indemnizaría a los familiares del muerto y de los heridos. Siete dramáticos días tuvieron que ser necesarios para que el gobierno entre en razón y para que Cochabamba logre una gran victoria pero muy dolorosa.

6. Algunas enseñanzas.

Desde muchísimos años, los gobiernos de turno han realizado negocios con empresas nacionales y extranjeras, a espaldas de la opinión pública. Práctica que fue lamentablemente muy notoria durante el proceso de capitalización de las principales empresas públicas. En ese momento el pueblo no reaccionó, esperó las

⁷ Viendo las manifestaciones, Nestor Taboada, respondiendo a Ramírez, decía que estaba muy conmovido, al ver a “personas aparentemente insignificantes” pero que eran “gente del pueblo con un heroísmo extraordinario”. Más adelante, en su respuesta señalaba que “Los pueblos son extraordinarios cuando llega el momento de decidir sus cosas y lo hacen de corazón, hacen milagros” (La Razón, Ventana, 16 de abril)

elecciones para dar su voto de censura a un MNR y a un MBL que pensaban que lo había hecho todo bien⁸.

Ahora le tocó al Gobierno de Banzer cometer un similar atropello, firmando el contrato con Aguas del Tunari, pero esta vez la población cochabambina, cansada de la corrupción y de los negociados, se movilizó solida y decididamente. A futuro el Gobierno tiene que ser mas serio, velando firmemente por los intereses de la población. Además, tiene que ser transparente y no actuar de la manera como se comportó con la Coordinadora, a la que le costó demasiado obtener el contrato y los otros documentos relacionados. Además, como moraleja habría que decir que no hay nada peor que la falta de una información fidedigna, ya que los rumores pueden ser más dañinos que la misma realidad.

Pero la población, también esta cansada que empresas nacionales o extranjeras se aprovechen de las penurias del país. Lo que la ciudadanía quiere son empresarios "schumpeterianos", dinámicos y que realmente arriesguen sus capitales. Esta bien que hagan ganancias pero no a costa de empobrecer más a la gente. Estos últimos días se han observado varias críticas⁹ a la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba por su falta de visión en el conflicto y por su incapacidad de liderazgo en el escenario regional. Esperemos que las reflexiones realizadas les sean de utilidad y que en el futuro los empresarios dejen de lado su "mentalidad rentista" y tengan una visión, que vaya mas allá de sus ganancias inmediatas, aportando a la construcción de una sociedad más justa.

Ahora bien, desde 1985, los gobernantes de Bolivia están implementando un modelo neoliberal de manera muy insensible. El Estado se achica y el mercado reina en todo. Sin embargo, la población no está satisfecha, ya que el modelo sigue produciendo iniquidades y pobreza. Las movilizaciones de Cochabamba, han sido también una insurgencia contra el modelo, ya que han demostrado que el agua no puede caer a manos del "mercado" y que el Estado tiene que mantener ciertas responsabilidades, tiene no más que ofertar a la población toda una serie de bienes y servicios públicos, como se hace en los Estados Unidos y en los países europeos.

Anderson tiene razón al indicar que el "peso del Estado de Bienestar" en el norte "no disminuyó mucho, a pesar de todas las medidas que se tomaron por contener los gastos sociales". Un indicador de ello es que el "PNB consumido por el Estado...aumentó, durante los años 80 , de más o menos 46% a 48% del PNB medio de los países de la OCDE" Además, Anderson indica que "la región del

⁸ Pero ahora si se está cuestionando la capitalización, particularmente sobre como están siendo administradas las empresas capitalizadas y sobre el papel que están jugando los directores que supuestamente representan los intereses de los bolivianos. La falta de información y transparencia, puede a futuro ocasionar nuevos conflictos.

⁹ Ver por ejemplo el Editorial de los Tiempos del 13 de abril.

capitalismo mundial que presenta mas éxitos en los últimos 20 años es también la menos neoliberal, o sea, las economías de Extremo Oriente como Japón, Corea, Taiwán, Singapur y Malasia”¹⁰ ¿Si el neoliberalismo no se está aplicando en el norte, y si los países exitosos son los menos neoliberales porqué tendría que ser entonces América Latina y Bolivia mas papistas que el papa?

Ademas, las luchas de Cochabamba fueron contra la Bolivia autoritaria y la Bolivia de la discriminación. La prepotencia mostrada por el gobierno le rebotó en sus narices. Lupe Cajias tiene razón, en su artículo “El decreto, la boda y el funeral”, al indicar que:

“Wálter Guiteras... Manejó con tal desatino la crisis en Cochabamba que hoy por hoy no tiene pisada en ese departamento. Él, más que el agua, logró reunir en un sólo puño crispado a miles de cochalas. Y como rúbrica, organizó una boda fastuosa...que fue una bofetada al hambre de los excluidos. No hay formas para medir cuánto agrade a los pobladores que alguien gaste miles de dólares en una noche de farra y que los gobernantes sólo lleguen a un pueblo para divertirse y no para escuchar sus necesidades”. (Los Tiempos, 13 de abril).

El artículo de Rafael Archondo, “Ya no somos los mismos. El Adiós al 21060” va también en este sentido, ya que la gente logró esta vez cambiar el ritual de los últimos gobiernos electos en las urnas pero que siempre se iban transformando en dictaduras caprichosas¹¹, acostumbradas “a negociar la capitulación de obreros, campesinos, vecinos o cívicos...Ahora el gobierno se ha sentado a jugar el papel contrario” renunciando “a todo lo que aspiraban imponer; la derrota del Estado es total y pionera” (La Razón, Ventana, 16 de abril)

Pero también el desdén y el desprecio tuvieron piernas cortas, ya que campesinos y dirigentes sindicales se abrieron su espacio y tuvieron que ser escuchados. Fue en la práctica, la conquista de la ciudadanía, frente a un cierto racismo y altanería que profesan muchos miembros de las elites políticas e intelectuales del país. Esperemos que en el futuro dichas elites sean un poco más humildes y escuchen más atentamente al común de la gente.

¹⁰ Perry Anderson, “Neoliberalismo: un balance provisorio” en Sader, E. y Gentilli, P. La trama del Neoliberalismo, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 1997, pag. 21 y siguientes. El Banco Mundial, en su Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1997, presenta cifras similares a las de Anderson, indicando que “El gasto público representa en estos momentos casi la mitad del ingreso total en los países industrializados” (pag. 2).

¹¹ Desde 1985, año que se implementa el 21060, todos los gobiernos, tanto el de Víctor Paz, como el de Jaime Paz, como el de Gonzalo Sánchez de Losada y ahora el de Hugo Banzer han impuesto el Estado de sitio. Claro que no con los mismos resultados, que los de la actualidad, esta vez el pueblo logró derrotar al gobierno que tuvo que suspender dicha medida de excepción.

Por otra parte, el conflicto a revelado una crisis en los mecanismos de representación es por ello que habría que institucionalizar nuevos canales de participación. La Coordinadora al convocar a la "Consulta Popular" abrió el camino. Ahora le toca al Gobierno y a los partidos políticos de normar como en otros países la realización de plebiscitos y de otras formas de participación ciudadana. Y si para ello hay que cambiar la Constitución, pues los diputados y senadores deberían hacerlo y no solo contentarse de "levantar la mano".

Y hablando de los padres de la Patria, su credibilidad se vio afectada en este conflicto. Y es que todavía el Congreso no ha podido convertirse en otro poder del Estado, separado del ejecutivo. Para ello se necesitaría que los parlamentarios demuestren más seriedad y defiendan sus ideas, aún a costa de disentir, con su propio partido y con el gobierno, en uno u otro aspecto del acontecer político. Así, la población hubiera evitado apreciar los malabarismos de ciertos diputados cochabambinos de la megacoalición, que frente a la prensa dijeron que se oponían al Estado de Sitio y ya en el Congreso lo aprobaron, dando penosos discursos.

Por ultimo, hubieron heridos, presos y confinados y Cochabamba tuvo que lamentar la perdida de una vida humana. Pero también los costos monetarios han sido elevados, varios sectores productivos han conocido pérdidas importantes y los destrozos materiales fueron significativos. Sin embargo, si Bolivia deja atrás la corrupción, la falta de transparencia, la prepotencia y la discriminación con seguridad el sacrificio de la población no habrá sido en vano. Entonces, se podrá decir que los beneficios resultantes de estas movilizaciones habrían sido mayores que los costos.

Cochabamba, abril del 2000.